

La protesta social en América Latina: los casos de Brasil, Argentina, Colombia y Chile (2018-2021)

Social protest in Latin America: the cases of Brazil, Argentina, Colombia and Chile (2018-2021)

Agustín Nava

Universidad Nacional de Quilmes
agustinnava82@hotmail.com

Historia editorial

Recibido: 27/04/2022
Primera revisión: 24/05/2022
Aceptado: 04/07/2022
Publicado: 13/07/2022

Protesta social, Conflicto
laboral, América Latina,
Análisis cuantitativo.

Resumen

Por medio de un estudio cuantitativo y comparativo se analizan los procesos de protesta social que tuvieron lugar en Brasil, Argentina, Chile y Colombia entre los años 2018-2021. A partir del análisis cuantitativo se elaboró un mapa de la protesta social, identificando la fisonomía que adquiere la misma en términos de actores principales, demandas centrales y temporalidades e intensidades específicas. El análisis realizado nos ha permitido problematizar cómo las características y dinámica de la protesta social en los países de América Latina que hemos seleccionado, refleja (y condiciona) una serie de tendencias claves con respecto al desarrollo económico y político de la región.

Abstract

The processes of social protest in Brazil, Argentina, Chile, and Colombia between the years 2018-2021 are analyzed, through a quantitative and comparative study. From the quantitative analysis, a map of the social protest was elaborated, identifying the physiognomy that it acquires in terms of main actors, central demands and specific temporalities and intensities. The analysis carried out has allowed us to problematize how the characteristics and dynamics of social protest in Latin American countries reflect a series of key trends in the economic and political development of the region.

Keywords

Social protest; labor conflict; Latin American; quantitative analysis.

Resum La protesta social a Amèrica Llatina: els casos de Brasil, Argentina, Colòmbia i Xile (2018-2021)

Per mitjà d'un estudi quantitatiu i comparatiu s'analitzen els processos de protesta social que van tenir lloc a Brasil, Argentina, Xile i Colòmbia entre els anys 2018-2021. A partir de l'anàlisi quantitativa es va elaborar un mapa de la protesta social, identificant la fesomia que adquireix en termes d'actors principals, demandes centrals i temporalitats i intensitats específiques. L'anàlisi realitzada ens ha permès problematitzar com les característiques i la dinàmica de la protesta social als països de l'Amèrica Llatina que hem seleccionat reflecteix (i condiciona) una sèrie de tendències claus pel que fa al desenvolupament econòmic i polític de la regió.

Paraules clau

Protesta social, conflicte
laboral, Amèrica Llatina
anàlisi quantitativa

Nava, A. (2022). La protesta social en América Latina: los casos de Brasil, Argentina, Colombia y Chile (2018-2021), *Anuario del Conflicto Social*, 13.e-39616. <https://doi.org/10.1344/ACS2022.13.2>

1. Introducción

En los últimos años, América Latina ha vuelto a convertirse en el escenario de distintos e intensos procesos de lucha, que atraviesan a diversos países y que implican la participación de una multiplicidad de actores sociales. Al punto que, como bien señalan Quiroga y Magrini (2020), la categoría protesta social ha adquirido una renovada centralidad dentro de las investigaciones académicas centradas en la experiencia de América Latina. E incluso, la irrupción de la pandemia de Covid-19 ha acentuado el interés de los/as investigadores/as sobre la temática del conflicto social en la región¹. Sin embargo, a pesar de la diversidad de enfoques, todavía existe cierta reticencia a vincular las características centrales que presentan la conflictividad social y las dinámicas actuales del capitalismo contemporáneo (Bailey et al., 2021).

El objetivo que nos proponemos en este artículo es recuperar este escenario de lucha, abordarlo desde un punto de vista cuantitativo y comparativo, problematizando cuáles son los vínculos entre las principales tendencias que presenta la protesta social, las transformaciones que se están operando en el plano de la economía y las configuraciones institucionales y políticas que les otorga cierta particularidad a los contextos nacionales de cada país. Proponemos, entonces, una lectura sincrónica y diacrónica de los conflictivos sociales que haga hincapié en las dimensiones histórica-procesuales que moldean las características y dinámicas de la protesta social, problematizando tanto las dimensiones más estructurales y de largo plazo que marcan las dinámicas de la conflictividad social, así como también los factores más coyunturales o puntuales.

Dicho ejercicio lo llevaremos a cabo a partir del análisis de cuatro países en particular: Brasil, Argentina, Chile y Colombia, entre los años 2018 y 2021. Hemos seleccionado estos cuatro casos en la medida en que, no solo son las cuatro mayores economías de América del Sur, sino que también los mismos se caracterizan por presentar altos niveles de conflictividad, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, como veremos más adelante. Analizaremos, entonces, la conflictividad social por medio una metodología de análisis cuantitativa, que nos permitió elaborar un mapa de la protesta social, a partir del cual hemos identificado la fisonomía que adquiere la misma en términos de actores principales, demandas centrales y temporalidades e intensidades específicas de la misma.

En términos generales, el contexto de más largo plazo en el que se inscriben estos procesos de lucha está marcado por el desarrollo de ciertas tendencias que evidentemente afectan el mercado de trabajo, con niveles persistentes de desocupación y subocupación y una fuerza laboral con bajos niveles de calificación y salariales, y, por añadidura, cada vez más fragmentada. América Latina se caracteriza por ser una de las regiones con mayores tasas de desigualdad de

¹ En lo que respecta solo a la temática “protesta social y pandemia”, podríamos citar los trabajos de: Bloem y Salemi (2021), Metternich (2020), Murillo (2021), Barrett y Chen (2021), Natalucci et al. (2020), Barbosa Dos Santos (2021), Alvarado Alcázar et al. (2021), Basualdo y Peláez (2020), Duque et al. (2020), Kowalewski (2020), Bringel (2020) y Pleyers (2020), entre otros.

ingresos y con disparidades muy pronunciadas con respecto al acceso a la educación, la vivienda y los servicios básicos (Gasparini et al., 2011). Sobre estas tendencias de más largo plazo se suma el desencadenamiento de una crisis profunda como consecuencia de las medidas destinadas a controlar la propagación de la pandemia de Covid-19. Como sostiene Juan Grigera (2022), en América Latina la pandemia ha golpeado a una región que ya estaba atravesada por una crisis con múltiples capas y temporalidades variadas, marcada por una desaceleración de la actividad económica patente sobre todo desde la crisis financiera global de 2008.

Todo lo cual, a priori, implicaría importantes obstáculos para la organización y acción de la clase trabajadora. Sin embargo, la particularidad es que, a la par de estas tendencias, se registra a nivel regional (y también global) un importante incremento de la conflictividad tanto del movimiento obrero como de otros sectores sociales (Silver, 2021; Bailey et al., 2021). En este sentido, el contexto de estancamiento económico y de crisis prolongadas que afectan a varios países de América Latina se combina tanto con la intensificación de luchas clásicas como con el desarrollo de nuevas formas de luchas. De manera que, de la mano de la intensificación del conflicto asistimos también a ciertos cambios en la fisonomía de la protesta, aspecto sobre el cual pondremos un especial énfasis.

En cuanto a la organización del artículo, en primer lugar presentaremos una breve sección en donde especificaremos la estrategia metodológica para llevar a cabo el análisis cuantitativo de la protesta social. Luego en dos secciones analizaremos sintéticamente, por un lado, el conjunto de transformaciones mundiales y regionales desde mediados de la década del 70, haciendo particular hincapié en el proceso de reestructuración del capital, de internacionalización de la producción y del cambio tecnológico; y por el otro, las particularidades de los ciclos políticos en los últimos años. En las siguientes tres secciones abordaremos el objeto particular de este trabajo: primero analizando las tendencias generales de la protesta social, sobre todo las referidas a quienes son los principales sujetos de los conflictos y las demandas centrales que los motorizan; luego deteniéndonos específicamente en la dinámica de la conflictividad laboral; y, por último, abordaremos la temporalidad política propia de la protesta social en los cuatro países seleccionados. En las conclusiones retomaremos las principales ideas expuestas a lo largo del trabajo.

2. Notas teóricas-metodológicas

Consideramos necesario, antes de emprender el análisis, especificar algunas definiciones teóricas y metodológicas que subyacen a la metodología de análisis cuantitativa del conflicto social. En particular, abordaremos el estudio cuantitativo de la protesta social a partir de un enfoque similar al método de Protest Event Analysis (Hutter, 2014), que consiste básicamente en registrar una secuencia temporal de acciones conflictivas llevadas a cabo por distintos sujetos sociales en relaciones con otros actores o instituciones sociales, que con distintos niveles organizativos buscan la consecución de una o más demandas, defender situaciones existentes, concretar determinados intereses o promover proyectos sociales y políticos alternativos.

Como fuente hemos utilizado la base de datos abierta ACLED². La misma está construida en base a un registro y codificación de acciones de violencia política y protesta, llevada a cabo por varios/as investigadores/as (que además incluye tres instancias de revisión para asegurar validez, precisión y relevancia) en base al relevamiento de una multiplicidad de portales de noticias específicos de cada país³. Como, además, se utilizan las mismas reglas respecto a las variables quién, qué, dónde y cuándo, permite llevar a cabo análisis comparativos con una alta rigurosidad. Por añadidura, y quizás más importante, si bien la base de datos registra una multiplicidad de eventos de protesta y violencia política, sin embargo el desglose y detalle de la información nos ha permitido en primer lugar aislar los eventos que nos interesaban a nosotros (básicamente las acciones de conflictividad social y laboral) excluyendo otros eventos registrados (tales como linchamientos a delincuentes comunes, secuestros violentos, acciones armadas de organizaciones militares y paramilitares, represiones policiales, atentados de grupos del crimen organizado, etc.). Por otra parte, nos ha permitido responder preguntas centrales para analizar la dinámica de la protesta social: quiénes se movilizaban, cuándo, dónde y cómo lo hacen, y por qué impulsan determinadas acciones.

En este punto caben dos aclaraciones. ACLED registra fundamentalmente acciones en donde el conflicto se exterioriza a través de alguna manifestación material pública, tales como manifestaciones callejeras, actos y concentraciones, tomas de establecimientos, cortes de rutas, etc. Si bien esto supone un límite que presenta esta base de datos, ya que claramente sería un error subestimar la centralidad que todavía detentan las luchas obreras en los lugares de trabajo (Silver, 2021), de todos modos, como sostienen varios autores (Bieler y Nowac, 2021; Bailey et al., 2021), también es necesario ir más allá de los sitios de producción para poder captar los diversos repertorios de acción como indicadores de las tendencias actuales de la conflictividad social y laboral. Por otro lado, la base de ACLED no establece una discriminación de los conflictos por un contenido esencial a priori, de modo que también nos permite dar cuenta de la heterogeneidad de actores que participan de la misma. El campo de la “protesta” no solo está protagonizada por sectores subalternos ni tienen necesariamente un sentido emancipatorio (Quiroga y Magrini, 2020). Como veremos más adelante, una de las particularidades de la dinámica de la protesta social en los últimos años es como muchas veces los sectores liberales y conservadores también hacen uso de la “calle” para expresar sus demandas.

A partir de estas consideraciones, entonces, hemos elaborado una base de datos que consta de 18134 unidades de análisis para el caso de Brasil, 9123 para Argentina, 7067 en Chile y 5068 para Colombia, para los cuatro años que comprende el periodo 2018-2021. En otra ocasión hemos dado cuenta de la fiabilidad y representatividad de nuestra muestra a partir de la base de da-

² ACLED (“Armed Conflict Location & Event Data Project”) es un proyecto de recopilación, análisis y mapeo de eventos de protesta y violencia política registrados en distintas regiones del mundo, con particular énfasis en violencia armada.

³ La base está elaborada teniendo en cuenta un criterio regional, evitando así la sobrerrepresentación de algunas regiones (en particular las capitales y centros urbanos más importantes) como consecuencia de la elección de determinados diarios o periódicos

tos ACLED (Nava y Grigera, 2022)⁴. Como se puede observar, en cada uno de los países se registran promedios mensuales altos de acciones de protesta: Brasil (377), Argentina (190), Chile (147), Colombia (105). Sin embargo, si medimos la conflictividad considerando los distintos tamaños poblacionales, algunos países se destacan por presentar una mayor intensidad de las acciones. En particular, Chile es claramente el país en donde la protesta alcanza una mayor intensidad durante nuestro periodo de estudio, ya que presenta una tasa de incidencia⁵ de 36.8 conflictos cada 100.000 habitantes, mientras que en el país que le sigue en este orden (Argentina) la tasa de incidencia es de 20 conflictos cada 100.000 habitantes. Por su parte, tanto Colombia como Brasil presentan números sensiblemente más bajos: 9.9 y 8.4 respectivamente.

3. Reestructuración del capital, internacionalización de la producción y cambio tecnológico

A partir de la década del 70, las economías latinoamericanas atravesaron por una crisis del patrón de acumulación hasta entonces dominante: el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y del estado intervencionista (Ansaldi y Giordano, 2012). La forma de “resolución” de esta crisis se llevó a cabo a partir de un ciclo de reformas estructurales (disciplinamiento fiscal, racionalización del Estado, apertura de los mercados nacionales, privatización de las empresas y de los servicios públicos, desregulación del mercado de trabajo, entre otras) que implicaron una reestructuración del capital en general y el inicio de un nuevo patrón de acumulación.

Por añadidura, hacia la misma época, y como consecuencia de la crisis en las economías centrales, se inicia una nueva fase de la internacionalización del capital, que se caracteriza por el desplazamiento geográfico de partes del proceso productivo (deslocalización), dando lugar a las cadenas globales de valor delineando una nueva división internacional del trabajo (Piva, 2021). Este fenómeno ha implicado una presión adicional para la reestructuración del capital en los países periféricos, en tanto que los espacios nacionales han debido adecuarse a las condiciones que permitan insertarlos en procesos de reproducción global (Piva, 2021; Naspleda, 2021).

En parte, este proceso de reestructuración del capital derivó en un fenómeno de desindustrialización, entendida como la contracción relativa de los sectores manufactureros frente al sector servicios (tanto en términos de empleos como en su contribución al PBI) (Grigera, 2011). Más allá de los matices que se podrían señalar respecto al proceso de desindustrialización y de los debates sobre cómo interpretar este fenómeno⁶, lo cierto es que una de las características del mercado laboral latinoamericano es la alta proporción de empleo que se ubica en el sector terciario. De un promedio de 11 países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), el sector comercio representa el 20% del empleo total, y si sumamos las demás actividades terciarias (transporte,

⁴ Cabe aclarar que el abordaje cuantitativo de la protesta social no pretende cubrir la totalidad de las acciones de conflicto en estos países durante el período estudiado, sino construir una muestra que nos permita identificar tendencias claves a lo largo del tiempo y términos comparativos.

⁵ Tasa de incidencia de acciones de protesta [Eventos de protesta/población total x 100.000]. Los datos de población los hemos extraído de CEPAL (2019b).

⁶ Véase Smith (2020) y Grigera (2011)

servicios financieros y servicios comunales, sociales y personales), el sector terciario concentra casi la mitad del empleo total (CEPAL, 2019). No solo ello, sino que además la forma particular en que se produce la desindustrialización de América Latina está marcada por el hecho de que la alta proporción de los empleos en el sector servicios se han ubicado en aquellos de baja calificación y de baja productividad (Grigera y Nava, 2021).

Las reformas estructurales iniciadas a mediados de la década del 70 no han logrado tampoco dinamizar la acumulación del capital en la región. Desde la década de los 80 el crecimiento económico de América Latina ha sido tenue (Ros, 2011), aspecto que se ha acentuado a partir de la crisis mundial del 2008. Como consecuencia de ello, la demanda de mano de obra también ha sido débil. La tasa de desocupación para el promedio de América Latina en los últimos diez años acusa una tendencia creciente pasando de representar el 6.4% en 2008 al 8.1% en 2019. Sin embargo, lo más relevante quizás sean las altas y sostenidas tasas de subocupación. Para el año 2018 la tasa de subocupación era del 12,3% en Argentina, 7.2% en Brasil, 9.8% en Chile y 8.9% en Colombia (CEPAL y OIT, 2019). Más aún, la generación de nuevos puestos de trabajo en los últimos años se ubica más en la categoría de empleos por cuenta propia (en general, de menor calidad) que en la de los asalariados registrados (CEPAL y OIT, 2019).

Estas tendencias, a su vez, se pueden ver acentuadas por el impacto de las nuevas tecnologías digitales en la producción y el empleo. Como señala Naspleda (2021) la difusión de las nuevas tecnológicas digitales se encuentra fuertemente vinculada con los procesos de internacionalización productiva. Si bien, desde nuestro punto de vista, es evidente que la generalización y expansión de las nuevas tecnologías digitales (Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las Cosas, Robótica, las plataformas digitales e impresión 3D), están modificando y transformando las características del mundo del trabajo, de todos modos, como sostuvimos en un trabajo previo (Grigera y Nava, 2021) las tendencias más dinámicas de nuestro tiempo apuntan a que el impacto directo será más bien acotado en América Latina: la automatización probablemente tendrá un alcance limitado y la economía de plataformas podría reconfigurar algunos de los sectores informales ya existentes. Sin embargo, indirectamente, las grandes fuerzas que dan forma al cambio tecnológico seguramente impactarán en la región a través de los cambios más estructurales a nivel global. En particular, el incremento de la productividad en los países centrales como consecuencia del cambio tecnológico puede efectivamente desplazar la producción interna (con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo) por medio de una intensificación de la competencia externa. Además, el incremento de la automatización tiene el potencial de reestructurar las cadenas mundiales de valor, y con ello el empleo en los países periféricos, en la medida en que afectaría la ventaja de los menores costos laborales que había incentivado el outsourcing de la producción hacia estos países (Carbonero, Ekkehard y Weber, 2018).

Evidentemente estas tendencias están socavando los recursos de poder de los que dispone la clase trabajadora organizada. Los/as trabajadores/as de diferentes países de América Latina enfrentan una mayor precariedad y flexibilidad en sus condiciones de trabajo, con mayores niveles de informalidad. En el contexto latinoamericano, la ruptura o erosión del “contrato de trabajo tradicional” (es decir, una relación a largo plazo con una empresa, mediada por el Estado y regulado por la negociación colectiva, con los consiguientes derechos laborales y el acceso a la seguri-

dad social) es “normal” para menos del 53% de la fuerza laboral total (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía [Celade], 2020)

Al mismo tiempo, las diferencias salariales se acentúan entre los/as trabajadores/as de los sectores ubicados en las actividades de mayor productividad o más modernas de la economía, marcando nuevas tendencias en la polarización de la fuerza de trabajo. Si bien estas tendencias no son las únicas que operan en la dinámica de la protesta social, lo cierto es que tampoco se puede comprender ciertas características de la conflictividad social sin incluir una problematización específica sobre esta polarización y/o precarización del mercado de trabajo. De todos modos, como señalan Bieler y Nowak (2021), con respecto a la informalidad/precarización hay que evitar caer en un esquema binario o dualista en donde existiría un sector formal separado y diferenciado de otro informal, ya que en muchos sectores de la clase trabajadora coexisten al mismo tiempo relaciones laborales formales e informales. Aspecto que también nos obliga, como sugiere Atzeni (2021), a no equiparar linealmente las formas de organización y acción de la clase trabajadora con la institución sindical per se, analizando también las diversas y múltiples experiencias organizativas y repertorios de acción de la clase trabajadora que no se inscriben dentro de un marco de representación formal. Ello no supone, como veremos más adelante, que los sindicatos hayan dejado de ser un actor central para organizar, expresar o institucionalizar el antagonismo de clase.

Si bien todas estas tendencias que estamos mencionando apuntan hacia un debilitamiento del poder de negociación de ciertos sectores de la clase trabajadora, sin embargo, la particularidad del impacto de la pandemia es que ha dejado en evidencia ciertos elementos que apuntan en sentido contrario (es decir, hacia un fortalecimiento de su poder de negociación). Estamos haciendo alusión al lugar esencial en la producción que todavía detentan algunos sectores laborales (por ejemplo, en el caso de la salud, pero también logística o IT, la cadena de abastecimiento de alimentos, etc.), así como también a los límites intrínsecos que tienen algunas estrategias del capital para desarticular a la fuerza de trabajo. Como ejemplo más palmario de esto último, podemos mencionar los obstáculos para automatizar y/o deslocalizar geográficamente algunas actividades centrales tales como la docencia y ciertas actividades del sector servicios.

4. Ciclos políticos

A estas dimensiones más estructurales y de largo plazo que marcan a las dinámicas de la conflictividad social, se le superimponen lógicas más políticas del conflicto. En particular, como veremos más adelante, el hecho de que determinados países hayan experimentado (o no) el giro a “la izquierda” o “marea rosa” pos 2000 explica en parte ciertas similitudes y diferencias que presenta la dinámica de la protesta social en los distintos casos considerados. Con el término giro a la “izquierda” o “marea rosa” nos estamos refiriendo al ciclo de movilizaciones contra el neoliberalismo que a principios de siglo, en determinados países (Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador), llevaron al poder a distintos gobiernos que adoptaron políticas sociales orientadas a morigerar de manera limitada algunos de los efectos de dos décadas de liberalización económica (Rojas, 2020). Aunque también mantuvieron una continuidad con lógicas (sobre todo económicas) heredadas de la etapa previa. Si bien nunca existió una homogeneidad en las experiencias políticas de la región, y cada uno de los países seleccionados presenta sus particularidades y diver-

sidades, de todas formas podríamos agruparlos en aquellos que no se insertaron tempranamente en este ciclo de cambios (Chile y Colombia) y aquellos que sí (Brasil y Argentina)

El escenario se complejiza aún más si tenemos en cuenta que, en los últimos años, asistimos a cierto agotamiento de este ciclo de gobiernos de “izquierda”, que ha encontrado su manifestación más clara en la elección de Mauricio Macri (2015-2019) y Jair Bolsonaro (2019-) como presidentes de Argentina y Brasil respectivamente. Desde nuestro punto de vista, este declive de la “marea rosa” en América Latina es indisociable, entre otros aspectos⁷, de la crisis financiera mundial de 2008 y el fin del boom de los *commodities* a partir de 2012 (Grigera, 2022). Aunque también es obvio que fue (y está siendo) cuestionada por una “...combinación de protestas surgidas a su izquierda y por la reacción restauradora de las derechas neoliberales” (Gaudichaud et al., 2019, 9). Por añadidura, la irrupción de la pandemia de Covid-19 ha acentuado una crisis de legitimidad en diversos países de la región (Grigera, 2022), más allá de las experiencias políticas concretas, todo lo cual le ha otorgado ciertas particularidades a la dinámica de la protesta social en los casos analizados.

El escenario político en el que se inscribe nuestro periodo de estudio en particular (2018-2021) está marcado, entonces, por fenómenos no lineales y abiertos, en tanto que a pesar de que las experiencias de “izquierdas” están siendo cuestionadas y debilitadas, las alternativas liberales que las han sucedido (como en los casos de Brasil y Argentina) también han encontrado sus límites para consolidarse y extenderse. Por otro lado, aquellos países que por muchos años habían resultado inmunes a la “marea rosa”, están virando de manera tardía hacia otros signos políticos (Chile 2022 y Colombia 2022) en parte como consecuencia del ciclo de rebeliones populares que analizaremos detenidamente en el último apartado.

5. Fisonomía general de la protesta social

En los apartados anteriores hicimos hincapié en que se pueden reconocer ciertas tendencias que a priori crean barreras y obstáculos para los procesos de organización y lucha tanto del movimiento obrero como de otros sectores sociales. Sin embargo, los casos considerados se encuentran atravesados por amplios procesos de lucha, motorizadas tanto por sujetos que podríamos considerar clásicos en el campo de la protesta social, como por nuevos actores. De manera que, si bien no se podría afirmar que la conflictividad ha salido de escena, habría que colocar, no obstante, cierto énfasis en los cambios que se operan en el plano del conflicto social.

En este sentido, la calle ha dejado de ser el lugar exclusivo de protesta de diversos actores institucionalizados de la sociedad (tales como el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres y LGBT, etc.), para convertirse también en el recurso al que apelan diversos sectores no institucionalizados o corporativos para expresar sus demandas e intereses.

Más aún, del mapa de la protesta que hemos elaborado para los cuatro países seleccionados, podríamos destacar el hecho de que entre un tercio y la mitad de las acciones de protesta

⁷ Sobre el debate con respecto a los límites y logros de la “marea rosa” en América Latina véase, entre otros, Rojas (2020), Webber (2019) y Gaudichaud et al. (2019).

para el total del periodo analizado están protagonizadas por sujetos que no presentan ninguna afiliación institucional o corporativa (descritos en las noticias como "vecinos", "ciudadanos", o sencillamente "manifestantes", etc.), que en nuestra codificación aparecen con la sigla SIIC (sin identificación institucional o corporativa) (véase figuras 1, 2, 3 y 4). Este sector, en verdad, es altamente heterogéneo a su interior y con una multiplicidad de demandas, aunque se pueden reconocer dos tipos de situaciones.

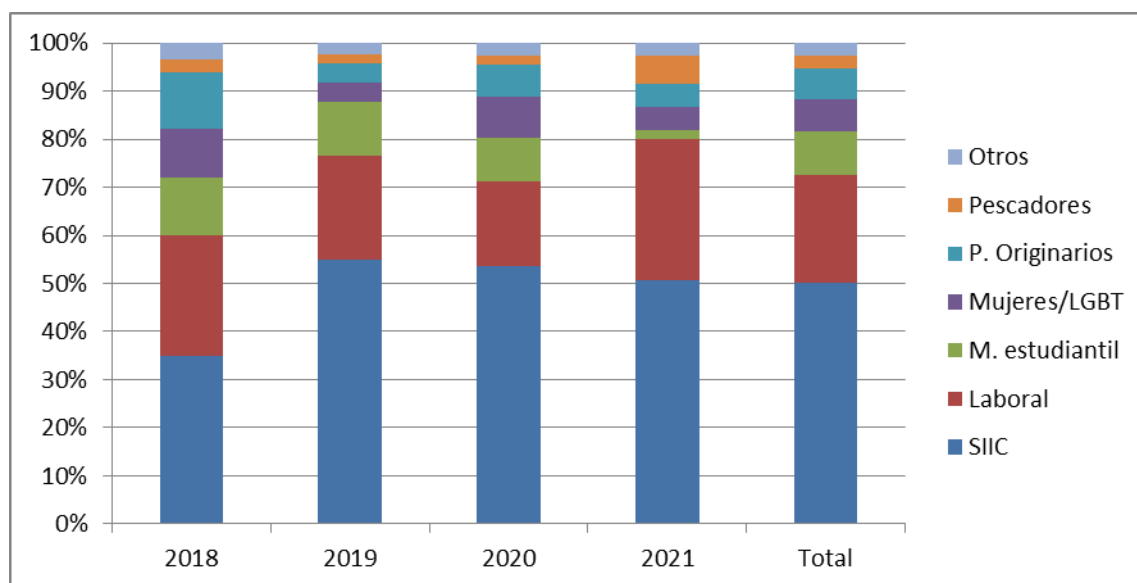
Por un lado, acciones en donde en general los diversos y heterogéneos sujetos no se encuentran institucionalizados y se activan contra situaciones particulares o para resolver problemas concretos. En los cuatro países es bastante recurrente que los "vecinos" tomen las calles para reclamar por la prestación de diversos servicios públicos, la realización de determinadas obras de infraestructura o el otorgamiento de terrenos en donde poder construir sus viviendas. Así como también demandando mayor seguridad ciudadana o en contra de la violencia policial, entre otras cuestiones. Este aspecto de la conflictividad social, por un lado, tiene claros vínculos con la crisis de legitimidad que aqueja a los Estados latinoamericanos ante las limitaciones evidenciadas en responder a sus ficcionales "funciones esenciales".

Sin embargo, si analizamos más detenidamente estos conflictos de "usuarios" demandando mejoras en las frecuencias del transporte público o por el precio del boleto, de "conductores" reclamando contra el aumento de los peajes, de los combustibles o por el mejoramiento de las rutas, y de "comerciantes" protestando por el incremento de los impuestos, en verdad podríamos reconocer la protesta individualizada de diversos sectores de trabajadores/as, en particular de cuentapropistas, monotributistas, trabajadores/as en negro, etc. Es decir, los/as ubicados/as fundamentalmente en el sector servicios, de baja productividad y bajos salarios. Por supuesto, estos sectores además no se encuentran sindicalizados y tampoco pueden paralizar la actividad en sus lugares de trabajo como repertorio de protesta y presión. Esta característica en el patrón de la conflictividad, desde nuestro punto de vista, se encuentra en parte vinculado con las transformaciones en la composición de la clase trabajadora que se han producido como consecuencia de las tendencias generales de la reestructuración del capital, y más en particular con la polarización interna de los mercados laborales que caracteriza a las economías de América Latina. Si bien como sostiene Adrián Piva para el caso argentino, y que aquí podríamos extender para los demás casos, "...el aumento del espacio social ocupado por las personificaciones individuales del trabajo es correlativo a la disminución de la densidad y el volumen ocupado por las organizaciones obreras en el espacio de las luchas sociales" (Piva, 2016, 81), de todos modos, como veremos más adelante, estas últimas aún mantienen una importante centralidad.

Por otro lado, en particular en el caso chileno y colombiano, las acciones protagonizadas por sujetos que no presentan ninguna afiliación institucional o corporativa indican más bien ciertas tendencias a la radicalización de la protesta, en tanto que incluyen, además, eventos de protestas en donde la categoría de "manifestantes" subsume una diversidad de identidades corporativas previamente movilizadas, que se articulan y convergen en contra de las políticas de los gobiernos o contra el Estado. En ambos países este tipo de acciones que hemos etiquetado como SIIC adquieren una mayor centralidad, tal como se puede observar en las figuras 1 y 2. Tanto en Chile como en Colombia la mitad de las acciones de protesta del total del periodo están protagonizadas por sujetos a los cuales no se le puede adscribir una pertenencia institucional. Este protagonismo

es aún más marcado cuando la protesta adquiere una mayor intensidad y radicalidad, es decir durante 2019 en Chile y 2021 en Colombia, tal como veremos más adelante. Durante los “estallidos sociales”⁸ todas las identidades previas (obreros, estudiantes, mujeres, pueblos originarios, movimientos sociales, etc.) se subsumen bajo la categoría de “manifestantes” en momentos donde la protesta no solo adquiere altos niveles de violencia material, sino que además involucra a amplios sectores sociales que participan por encima de las estructuras de representación, en una lucha frontal contra el régimen político y social.

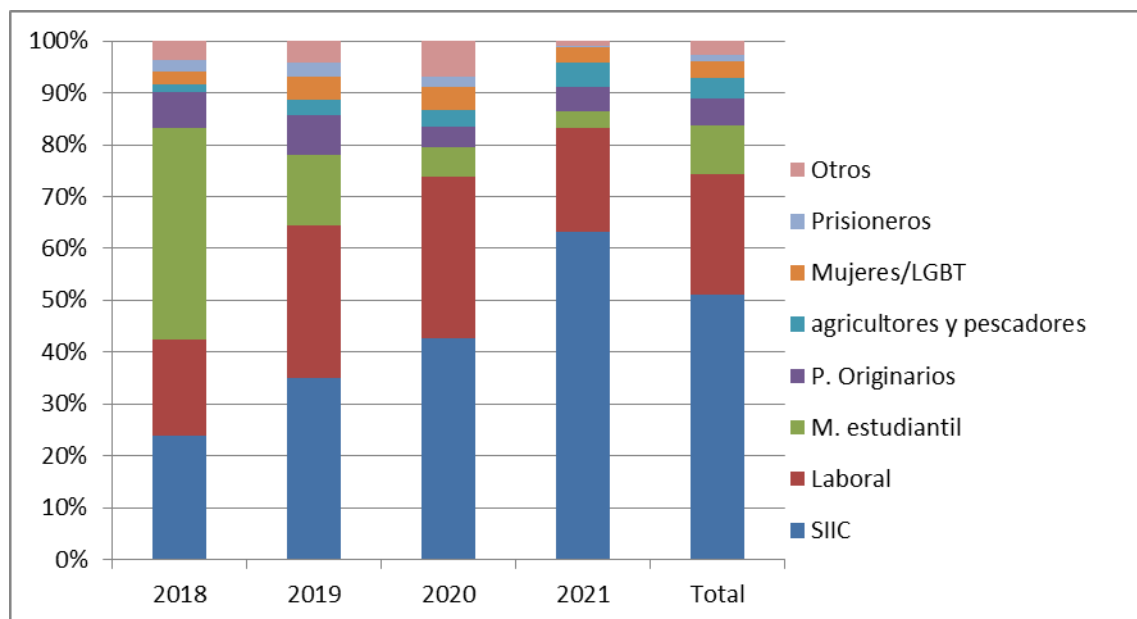
Figura 1. Sujetos de la protesta. Chile 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

Figura 2. Sujetos de la protesta. Colombia 2018-2021

⁸ Respecto a las características de los estallidos sociales en América Latina véase Castro Riaño (2020).



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

De todos modos, aun en estos dos casos, destaca el hecho de que en los cuatro países el movimiento obrero es el sujeto con pertenencia corporativa o institucional que mayor activismo y presencia tiene en el campo de la protesta social. Esta tendencia responde probablemente a factores estructurales y coyunturales: el mayor “poder estructural” y “asociativo” del movimiento obrero, por un lado, y por otro que en el contexto de la crisis post-pandemia se ha intensificado la tensión capital y trabajo. Aunque es evidente que la mayor predominancia numérica de la conflictividad laboral no implica necesariamente que el movimiento obrero tenga la capacidad de articular el conflicto social en general, de todos modos es significativo que, salvo el caso argentino, en los demás países las luchas que se dirigen contra del gobierno o contras políticas del mismo⁹ explican una parte importante de las acciones del movimiento obrero (el 39% en Chile, 40% en Colombia y el 53% en Brasil)¹⁰, al tiempo que en varias circunstancias logran articular sus luchas con la de otros sectores sociales.

A su vez, tanto en el caso brasilero como en el argentino la predominancia del movimiento obrero es claramente más marcada, ya que en promedio el 44% y el 41% respectivamente de las acciones de protesta se corresponden a conflictos laborales (véase figuras 3 y 4). En nuestra opinión, este dato es particularmente significativo si tenemos en cuenta que básicamente estamos haciendo mención a manifestaciones o movilizaciones en los lugares de trabajo o en la vía públi-

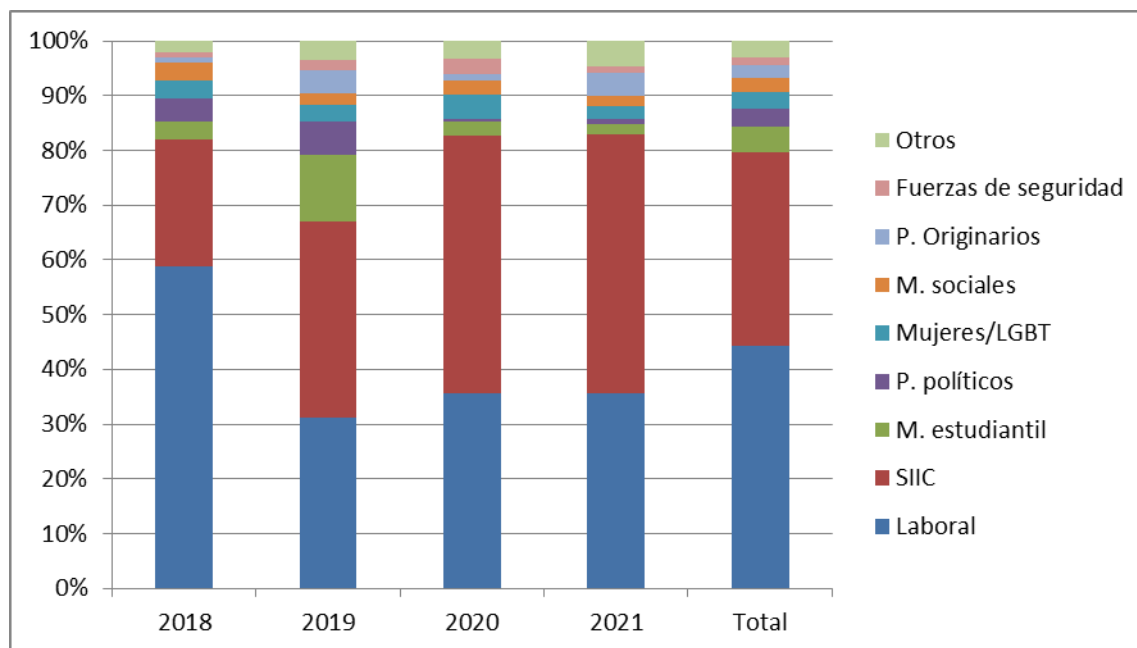
⁹ Cabe aclarar que, como sostiene Faundes Peñafiel (2016), el hecho de que las demandas se dirijan a las distintas instancias estatales, no supone necesariamente que el objetivo último de los distintos movimientos sociales implique una lucha por el gobierno o el poder del Estado mismo.

¹⁰ Como decíamos en Argentina este tipo de lucha tiene una menor predominancia, solo explican el 15% de las acciones. En este caso, el particular contexto de estancamiento económico y altos niveles de inflación explica que el 41% de las acciones del movimiento obrero estén relacionadas con el aspecto salarial (especialmente con el pedido de aumentos de los mismos) y el 21% vinculados con la pérdida de puestos de trabajo.

ca, un repertorio de acción secundario para el movimiento obrero si lo comparamos con las huelgas o paros. Por añadidura, además son acciones que a priori se verían obstaculizadas en el contexto de aislamiento físico y social que imperó a partir de la pandemia. E incluso, más allá del contexto de pandemia, una característica común en el contexto de América Latina es la tendencia de la mayoría de los países a establecer políticas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones, ya sea mediante restricción legales, la respuesta estatal violenta o la criminalización de los/as militantes y activistas (CELS, 2016).

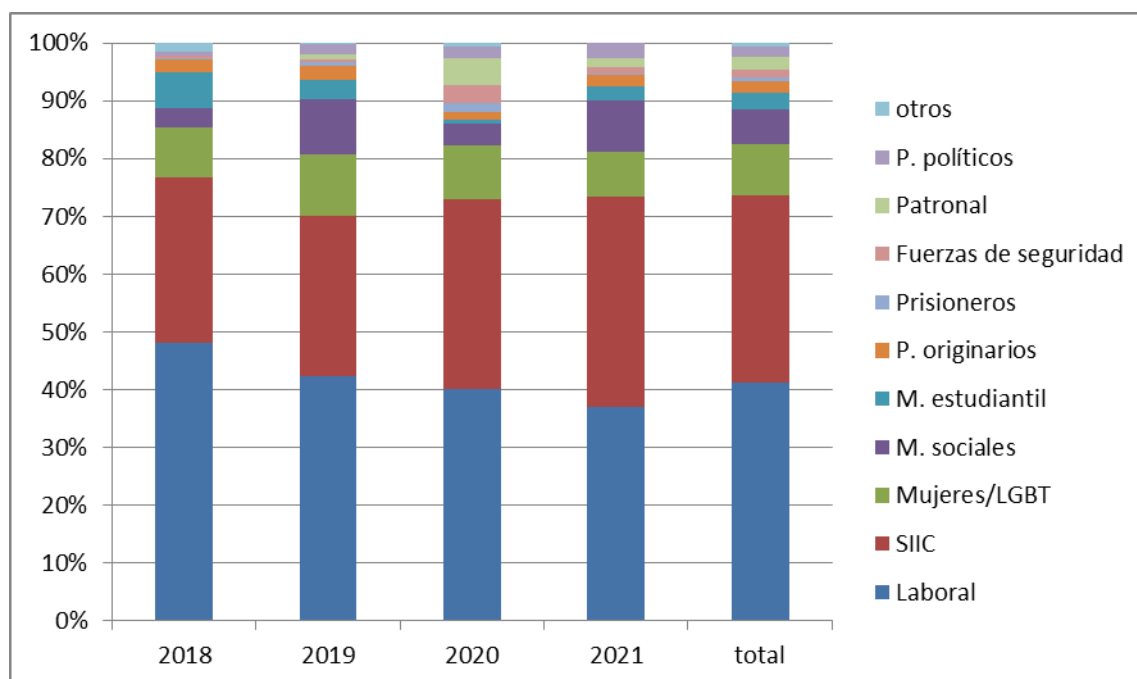
Sin embargo, en ambos casos, la particularidad es que esta predominancia se reduce hacia el final del periodo. Como se puede observar en las figuras 3 y 4, hacia el último año de nuestra serie las acciones protagonizadas por sujetos no institucionalizados acaban por ser mayoritarias, de manera más marcada en Brasil que en Argentina. A diferencia de lo que veíamos en el caso de Chile y Colombia, aquí el predominio de este tipo de sujeto en el campo de la protesta da cuenta más de una tendencia al crecimiento de la acción colectiva liberal-conservadora. Por ejemplo, en Argentina desde el inicio de la pandemia se han desarrollado varias manifestaciones en contra del gobierno nacional, cuyos protagonistas son una diversidad de sectores (“vecinos”, “ciudadanos”, “comerciantes”, “padres”, etc.), movilizados bajo el común denominador del descontento por las sucesivas medidas de aislamiento y sanitarias adoptadas para contener la propagación de los contagios de Covid-19. Lo mismo sucede en Brasil, aunque en este caso la polarización en torno al gobierno de Jair Bolsonaro y su gestión de la pandemia (entre otros asuntos) también se expresa en el plano de la protesta de sujetos no institucionalizados o sin pertenencia institucional. Durante los años 2020-2021 se volvieron recurrentes las jornadas de protesta tanto para manifestar el rechazo como en apoyo al gobierno de Bolsonaro.

Figura 3. Sujetos de la protesta. Brasil 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

Figura 4. Sujetos de la protesta. Argentina 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

Más allá de estas diferencias, se podría destacar que, en los 4 países, por fuera del movimiento obrero, los demás sujetos (mujeres, estudiantes, pueblos originarios, movimiento sociales, etc.), muchos de ellos englobados dentro de los considerados nuevos movimientos sociales, pre-

sentan una importancia secundaria e incluso marginal, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo y más allá de ciertos momentos en particular. Lo cual nos estaría indicando, en nuestra opinión, que todavía las problemáticas que en general giran en torno al acceso al mercado laboral (deterioro de los salarios, la precarización laboral, altos niveles de desocupación, etc.) signan a una parte importante de la sociedad. Aunque, obviamente, éstas no son las únicas.

El movimiento obrero, más allá de ciertas tendencias que apuntan a fragmentarlo y debilitarlo, continúa en el centro de la escena. Aspecto que contrasta con la menor atención que ha concitado la conflictividad laboral por parte de la literatura académica, en relación con otro tipo de conflictos (Bieler y Nowak, 2021). Sin embargo, como veremos a continuación las tendencias de más largo plazo que afectan al mercado de trabajo en los países de América Latina se verán reflejadas en el plano de la protesta, aunque no manera lineal.

6. Dinámica particular de la conflictividad laboral.

El análisis de la composición de los sectores y demandas que marcan la conflictividad laboral arroja ciertas regularidades que sería interesante destacar. En primer lugar, resulta significativo que, en los casos de Brasil, Colombia y Chile, los sectores que mayor protagonismo tienen desde el punto de vista cuantitativo en el plano de la protesta son los mismos, aunque en distintas proporciones en cada país. Si excluimos la variable “Centrales y nucleamientos”, los eventos de protesta motorizados por los/as trabajadores/as de la educación, los/as que pertenecen al sector transporte y aquellos vinculados/as al heterogéneo sector de servicios resultan mayoritarios para el promedio de los cuatro años considerados, tal como se puede observar en las figuras 5, 6 y 7.

Los/as trabajadores/as de la educación protagonizaron en el promedio del periodo analizado casi el 20% de las acciones en Chile, el 16 % en Colombia y el 8% en Brasil. Movilizados en general contra las políticas e iniciativas de los gobiernos nacionales o subnacionales. Incluso en algunos países durante determinados años el conflicto docente adquiere una mayor centralidad. Por ejemplo, en Colombia durante 2018 casi 1 de cada 3 conflictos estuvieron vinculados al ámbito educativo y en 2019 1 de cada 4 en Chile. Sin embargo, en todos los casos considerados, a partir del inicio de la pandemia, y la reducción de la presencialidad en los establecimientos educativos, la intensidad de la conflictividad docente se reduce y las demandas se modifican, ya que a medida que se retoman las clases presenciales el reclamo central se centra en la campaña de vacunación¹¹ y en las medidas de cuidado dentro de los establecimientos.

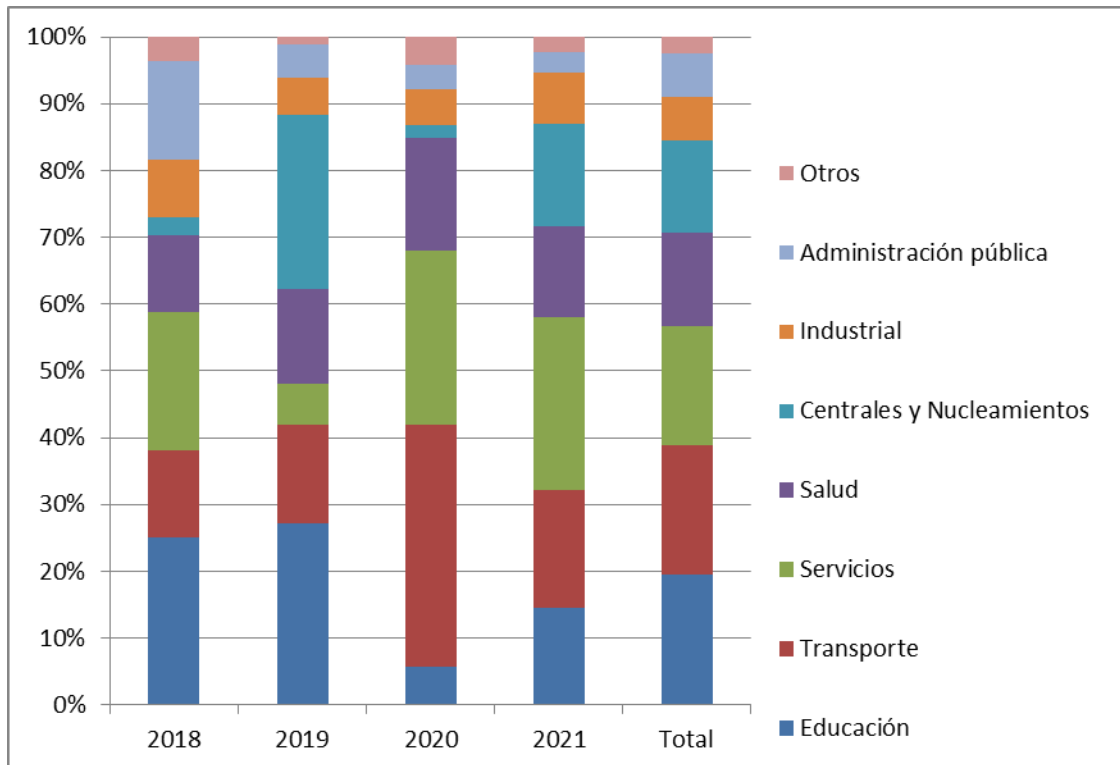
Más allá de esta situación coyuntural, como ha señalado Beverly Silver (2005; 2021), la recurrencia de la conflictividad laboral en el ámbito educativo se ha vuelto una tendencia sostenida a nivel global desde fines del siglo XX, que incluso se ha acentuado en la última década (Silver, 2021). Estas tendencias no solo se explican por el evidente y sostenido crecimiento del número de docentes a nivel mundial, sino también por los recursos de poder de los que pueden hacer uso. A pesar de que ciertas características de la actividad debilitarían su poder de negociación, ya que una huelga en determinado establecimiento educativo no solo no afecta directamente la valorización de capital, sino que tampoco tiene necesariamente un impacto inmediato en la actividad de

¹¹ Esta demanda se vuelve transversal a casi todos los sectores del movimiento obrero.

los demás establecimientos de enseñanza y menos un impacto directo en la actividad económica en general. Sin embargo, esta debilidad se ve compensada como consecuencia de que “... las huelgas de profesores tienen efectos a distancia en toda la división social del trabajo, trastornando las rutinas familiares y dificultado el trabajo de los padres” (Silver, 2005, 134), además del impacto político que tiene la paralización de una actividad tan central para gran parte de la sociedad. Pero, más aún, las transformaciones en el proceso laboral que están afectando y debilitando a importantes sectores de la clase trabajadora (el cambio tecnológico, las cadenas globales de valor, la producción *just-in-time*, etc.), tienen un impacto marginal en el ámbito educativo (Smith, 2020). Como sostiene Silver, tanto la amenaza de la relocalización de la producción o de la sustitución por medio de la automatización no son una presión concreta para los/as docentes, como si lo es para la mayoría de las actividades manufactureras (Silver, 2021). Es significativo que, tal como se desprende de nuestra base de datos, los reclamos por despidos sean bastante marginales dentro de la conflictividad docente, salvo quizá en el caso de Brasil.

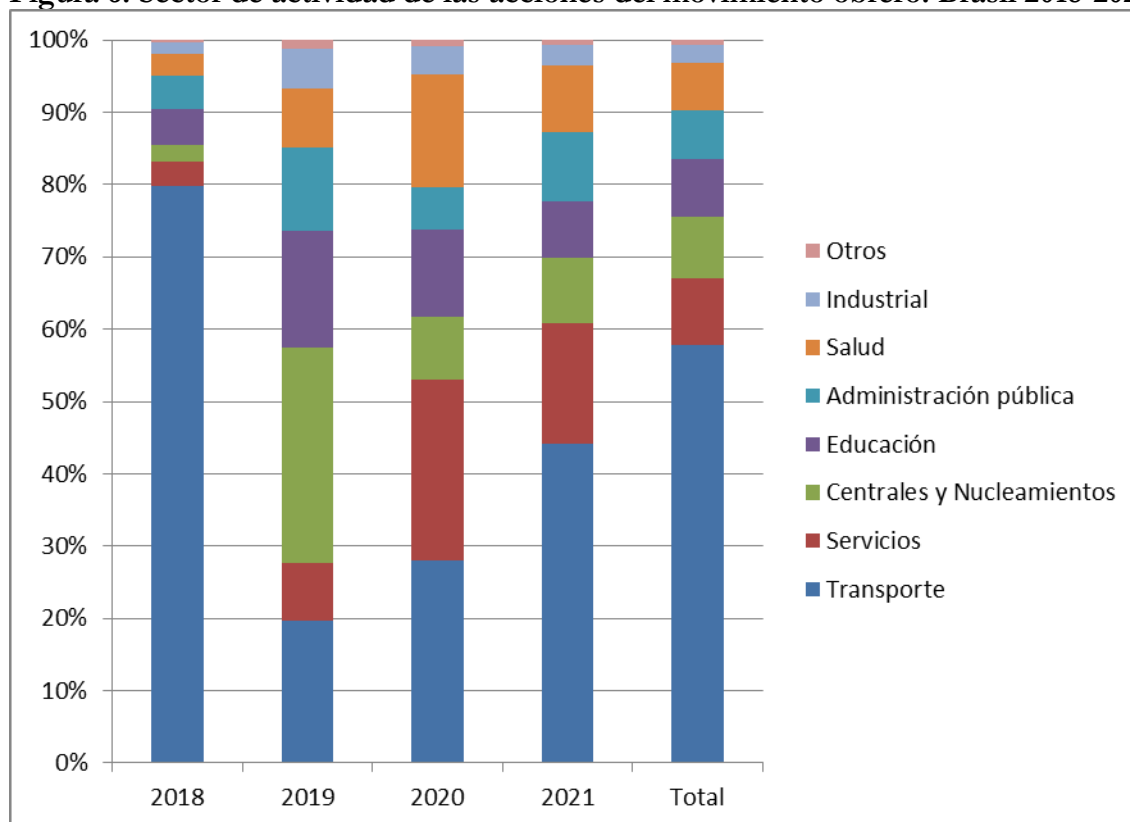
Todos estos elementos que estamos mencionando les han permitido a los/as trabajadores/as de la educación mantener una militancia bastante sostenida, en acciones que muchas veces no solo se articulan con otros sectores en lucha (por ejemplo, con el movimiento estudiantil), sino que además expresan una oposición directa a las políticas gubernamentales; y más en particular, en algunos casos a determinados cambios regresivos en la relación estado-economía. En Chile, por ejemplo, casi el 60% de las acciones de protesta de los/as docentes tienen como destinatario principal de sus demandas alguna política y/o instancia gubernamental, mientras que en Colombia es del 43%.

Figura 5. Sector de actividad de las acciones del movimiento obrero. Chile 2018-2021



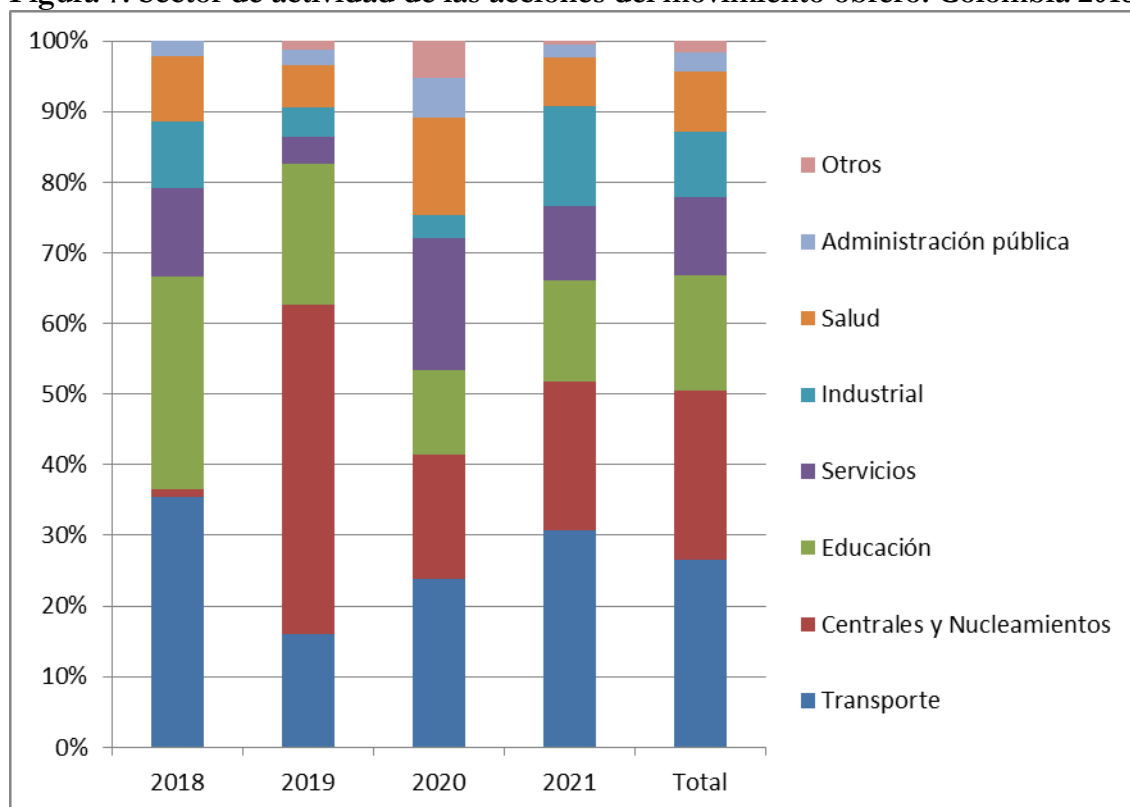
Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

Figura 6. Sector de actividad de las acciones del movimiento obrero. Brasil 2018-2022.



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

Figura 7. Sector de actividad de las acciones del movimiento obrero. Colombia 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

Como decíamos, los/as trabajadores/as del transporte es el otro actor que juega un rol central en el plano de la conflictividad laboral. Las acciones protagonizadas por el sector transporte y logística representan el 19% en Chile, y el 26% en Colombia, el 57% en Brasil¹². Históricamente, este actor ha tenido un papel importante dentro del movimiento obrero en general, en parte como consecuencia del poder que les otorga estar situados estratégicamente en los procesos de acumulación de capital. Sin embargo, en nuestro caso, a pesar de que dentro de este grupo se incluyen luchas de distinto tipo e incluso contrapuestas, destacan los reclamos tanto por el aumento del precio de los combustibles como los destinados a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad. Expresión esto último, en parte, de las condiciones de precariedad e informalidad en la que se llevan a cabo estas tareas, sobre todo en lo que respecta al transporte de pasajeros. Pero, además, en los últimos años a esta problemática se le añaden las tensiones derivadas de la introducción de las nuevas tecnologías digitales¹³. Cada vez se han vuelto más comunes, por ejemplo,

¹² Si bien este alto porcentaje de acciones en Brasil se encuentra en parte sobrerrepresentado por la masiva e inusual protesta de camioneros que tuvo lugar en 2018 (que retomaremos más adelante), sin embargo, como se puede observar en la figura 6 en los otros años este sector sigue siendo uno de los activos en este país.

¹³ En verdad, el sector transporte es uno de los pocos en donde se registran, por lo menos en nuestra base de datos, conflictos laborales vinculados con la introducción de nuevas tecnologías digitales. Por ejemplo, más allá del caso que ya mencionamos, en Brasil durante 2021 los trabajadores del metro y de empresas de colectivos llevan a cabo varias acciones en contra del cierre de las fuentes de trabajo como consecuencia de la automatización de las boleterías.

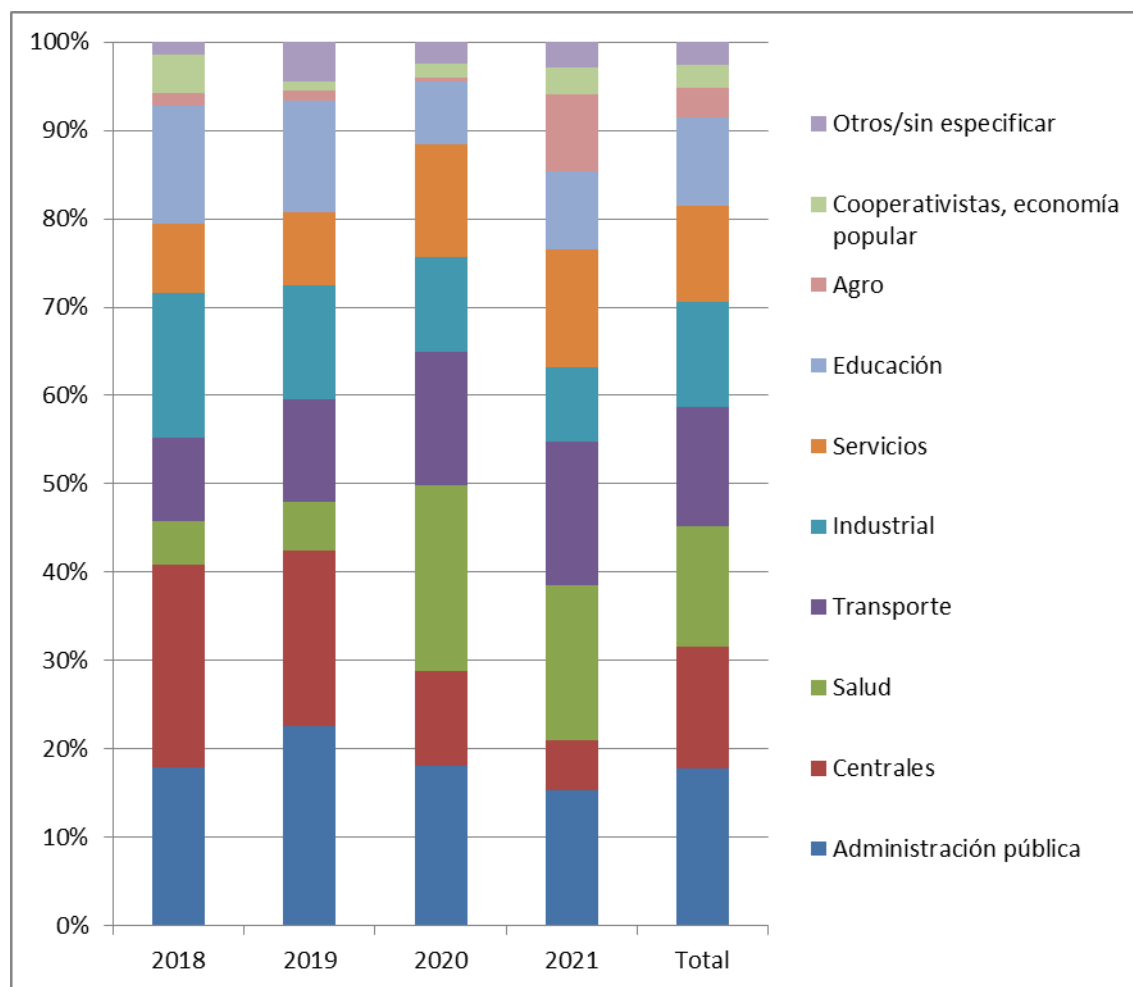
los reclamos de los taxistas en contra del funcionamiento y legalización de plataformas de transporte tales como Uber, como las acciones de trabajadores/as de plataformas (tanto de transporte como de reparto) exigiendo regularizar sus actividades. Más aún, en el contexto de la pandemia, se han desarrollado varias huelgas de los/as trabajadores/as de la economía de plataforma, que presentan la particularidad de que logran coordinarse a nivel regional, abarcando varios países de América Latina (Howson et al., 2020). Es obvio que las condiciones impuestas por la pandemia no solo han dado impulso a la actividad de las plataformas, sino que además han puesto de manifiesto tanto la centralidad que tienen las actividades de transporte y reparto en general, como la precariedad de sus condiciones de trabajo.

Esta última característica es la que también cruza al tercer sector de actividad que adquiere cierta centralidad en el plano de la conflictividad laboral: el heterogéneo, e incluso algo difuso, sector servicios y comercio. En Chile el 18% de los eventos de protesta son protagonizados por este tipo de trabajadores/as, en Colombia el 11% y en Brasil el 9%. En términos generales, no todos los/as trabajadores/as englobados dentro de este sector necesariamente pertenecen al sector de más baja productividad, bajos salarios y mayores niveles de informalidad/precariedad, sin embargo, podríamos sostener que quienes protagonizan gran parte de los eventos de protesta pertenecen a esta última categoría.

Más aún, si reparamos en el hecho de que el protagonismo de este sector se acentúa en el contexto de la irrupción de la pandemia. Este sector ha sido particularmente uno de los que más ha sufrido un impacto directo de la pandemia o de las medidas destinadas a controlarla, básicamente por la contracción de la actividad económica que ha afectado a sus actividades. Sobre todo a las que no fueron declaradas esenciales: como el turismo, actividades artísticas, restaurantes o bares, etc. En este contexto, se generalizaron rápidamente las protestas reclamando por la reapertura de sus actividades, en aquellos países donde las medidas de distanciamiento y aislamiento social fueron más intensas y extensas, o exigiendo a los gobiernos la implementación de medidas que garanticen un mínimo de ingreso o asistencia financiera, ya que, más allá de la extensión e intensidad de las medidas de confinamiento, la contracción de la actividad económica fue general en todos los países de América Latina. La particularidad aquí es que gran parte de estas acciones, en general, son motorizadas por instancias no sindicalizadas o plenamente institucionalizadas.

El último aspecto que nos interesa destacar es que, como se desprende del análisis realizado hasta aquí, salvo el caso argentino (figura 8), en los demás países el sector industrial ha tenido un protagonismo menor en el plano de la protesta “callejera”. Dicho aspecto responde, en nuestra opinión, no solo al hecho de que este sector tiene la posibilidad de apelar a otros repertorios de acción para expresar sus demandas o defender sus intereses (en particular las huelgas o paros), sino que también opera en ello los procesos de reestructuración del capital que redujeron en términos numéricos a la clase trabajadora industrial, flexibilizado sus condiciones de trabajo y fragmentando al colectivo de trabajadores/as.

Figura 8. Sector de actividad de las acciones del movimiento obrero. Argentina 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

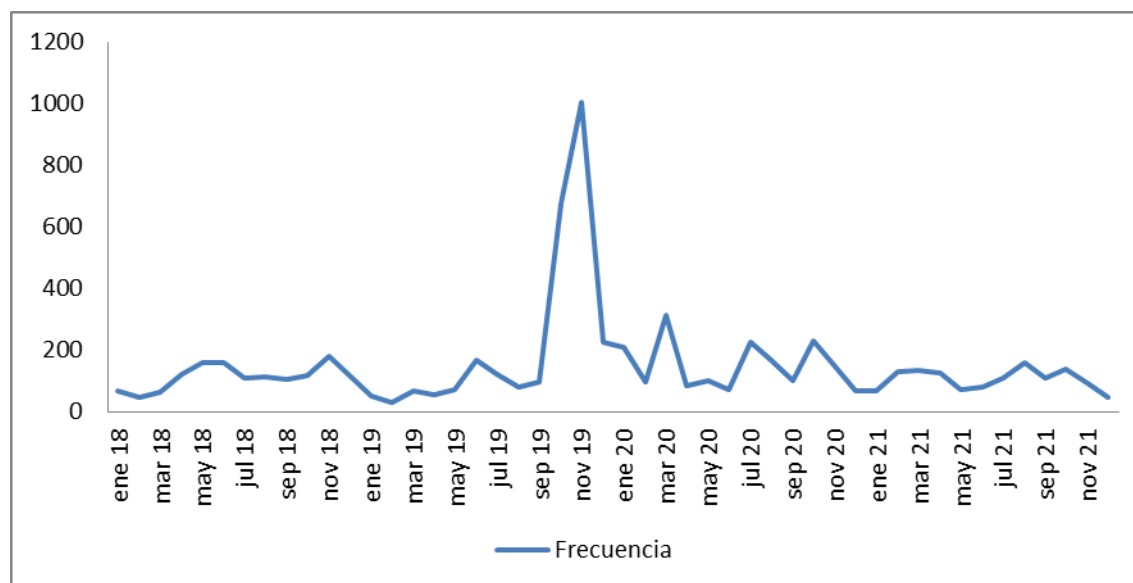
7. La temporalidad política

Más allá de ciertos rasgos en común que presenta el conflicto social en los casos seleccionados, podríamos sostener que en cada uno de ellos las temporalidades de la protesta son disímiles, en la medida en que sobre las tendencias de más largo plazo se superimponen lógicas más políticas del conflicto. Como se puede observar en las figuras 9, 10, 11 y 12, la dinámica de la protesta en el caso de Brasil, Chile y Colombia se caracteriza por estar marcada por picos de conflictividad durante determinados meses que superan ampliamente los promedios mensuales. Aunque, como veremos más adelante, el caso de Brasil no se asemeja al de los países andinos, sino más bien al de Argentina. Y en parte tiene que ver con ello, desde nuestro punto de vista, el hecho de que ambos países pasaron por experiencias de gobiernos progresistas o neopopulistas durante la década pasada (Grigega, 2017). Por el contrario, Chile y Colombia han sido dos de las excepciones más notables al fenómeno de la “marea rosa”.

Como sosteníamos, el caso de Chile se caracteriza porque la dinámica de la protesta es interrumpida abruptamente por lo que se ha denominado el “estallido social”. Es decir, las jornadas de masivas y radicalizadas protestas de octubre y noviembre de 2019, iniciadas luego de que se anunciara un alza programada del boleto del metro en Santiago de Chile. Estas alcanzaron picos de 615 y 1005 eventos de protesta por mes, que sextuplican el promedio mensual del período. Si bien no a los niveles de octubre y noviembre, luego de las jornadas del “estallido social”, la conflictividad social se intensifica si la comparamos con los niveles mensuales previos que se registraban desde 2018, incluso en el marco restrictivo signado por la pandemia. De todos modos, hacia 2021 el movimiento de protesta parece trasladarse de la calle a los canales más institucionales de la política.

Tengamos en cuenta que las demandas expresadas por el movimiento de protesta que se inició en octubre de 2019 pronto trascendieron la mera derogación del incremento en el boleto del metro y se elevaron hacia la necesidad de conformar una Convención Constituyente, cuyo objetivo era la elaboración de una Constitución Nacional, que a su vez derogara la redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). En el contexto del pleno funcionamiento de esta Convención y de las elecciones presidenciales (en las cuales resultó electo el candidato que encabezaba una coalición de izquierda por fuera de los partidos tradicionales), durante 2021 el número de acciones de protesta callejera es el menor de los 4 años considerados. Con el pasaje a la acción política, el ciclo de movilización se reabsorbe, en un proceso que, de todos modos, aún continúa abierto.

Figura 9. Conflicto social. Chile 2018-2021



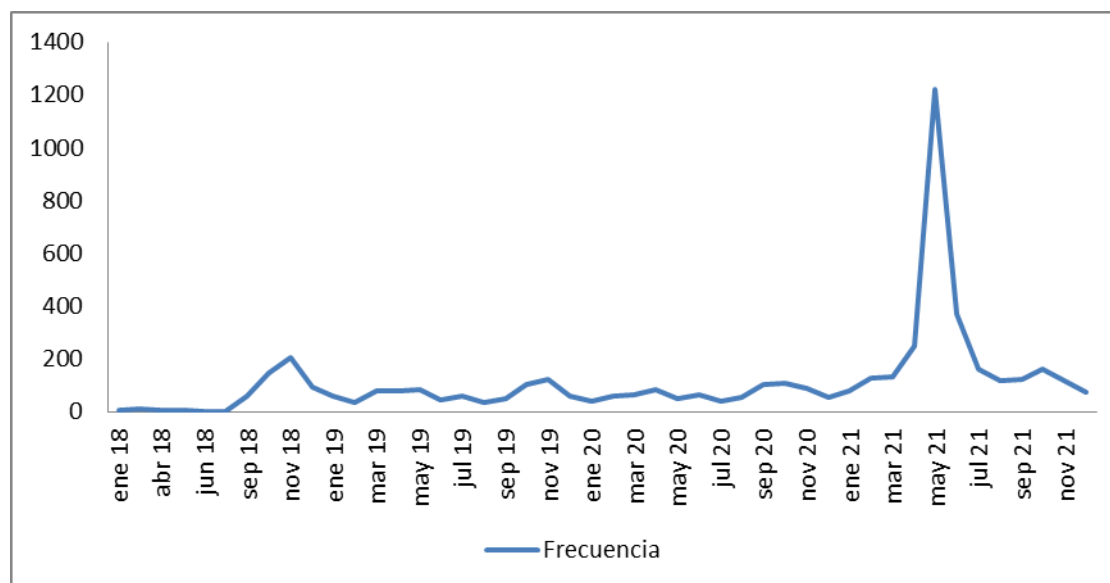
Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

El mismo sentido, la dinámica de la protesta en Colombia se muestra bastante lineal hasta la irrupción de las jornadas de mayo del año 2021, también denominadas “estallido social”, aunque los impulsores de las protestas las autodenominaron “Paro Nacional”. Incluso estas jornadas se muestran más disruptivas aun que en el caso chileno (por lo menos desde el punto de vista

cuantitativo), ya que durante mayo la protesta alcanza un pico de 1220 eventos de protesta, multiplicando por 11 el promedio mensual de acciones. Recordemos que a partir del 28 de abril de 2021 la Comisión Nacional de Paro convoca a una jornada de protesta en rechazo al anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque Márquez, que desemboca en una serie de manifestaciones multisectoriales (que muchas veces exceden a la propia Comisión Nacional) extendiéndose por distintas ciudades del país y que se radicaliza luego de que las fuerzas de seguridad actuaran con extrema brutalidad y violencia en la represión a los manifestantes. Si bien la intensidad de la protesta disminuye abruptamente durante el mes de junio, luego de varias negociaciones entre el Presidente y la Comisión Nacional de Paro, sin embargo durante lo que resta el año la movilización se mantiene en niveles superiores al de los años previos.

De esta manera, la dinámica de la protesta en Chile y Colombia presenta ciertas similitudes, básicamente en torno al carácter disruptivo de los conflictos, el tipo de sujetos que los protagonizan y, en parte, por la incidencia político institucional. En ambos casos, los conflictos se articulan en torno al rechazo de medidas de ajuste y expresan una oposición más general contra las consecuencias socioeconómicas del régimen económico. En este sentido, los estallidos de Chile y Colombia se pueden pensar como momentos tardíos del ciclo de rebeliones populares contra las medidas de ajuste estructural y las políticas de austeridad¹⁴.

Figura 10. Conflicto social. Colombia 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

A primera vista, la dinámica de la protesta en Brasil pareciera asemejarse a los dos casos considerados previamente. Sin embargo, las diferencias son sustantivas. Como se puede ver en la

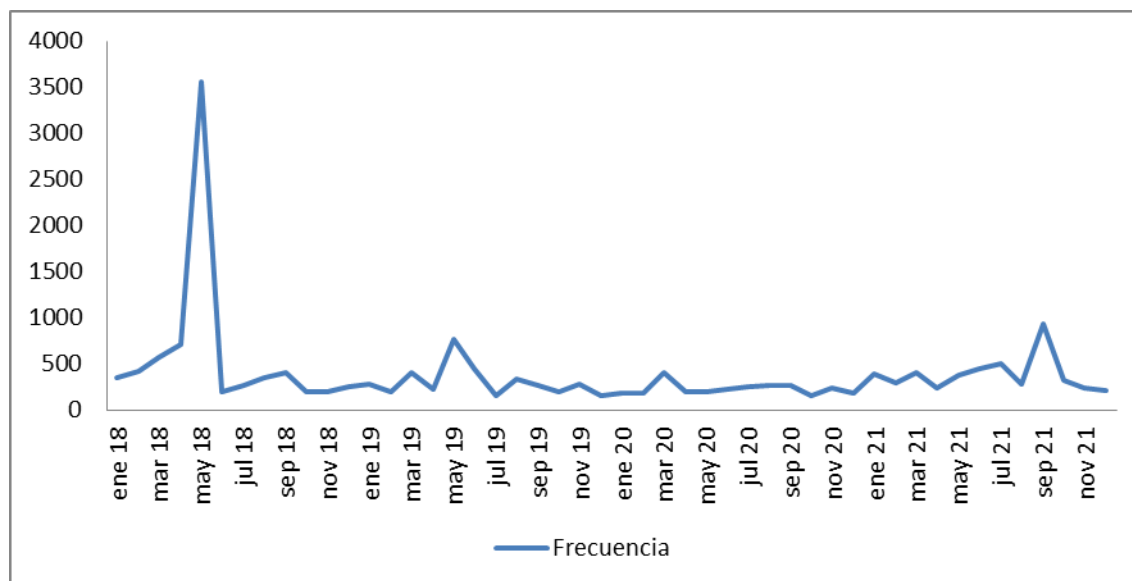
¹⁴ En el mismo sentido Barbosa Dos Santos (2021) y Murillo (2021).

figura 11, en el mes de mayo de 2018 también las acciones alcanzan un pico que irrumpe la dinámica de la conflictividad. Durante dicho mes se desarrollan 3560 eventos de protesta, multiplicando casi por diez el promedio mensual de acciones. De todos modos, las características y dinámica de la protesta que impulsa este crecimiento son divergentes respecto a los “estallidos” de Chile y Colombia. En particular, hacia fines de mayo numerosos grupos de camioneros se concentraron a lo largo de varias rutas en diferentes estados de Brasil, en protesta por los aumentos continuos y sostenidos del precio de los combustibles de la empresa petrolera Petrobras. La protesta, que estuvo liderada por la Confederación Nacional de los Transportistas Autónomos (CNTA) y la Asociación Brasileña de Camioneros (ABCAM), desembocó en una huelga de dimensiones inéditas que básicamente paralizó el país y puso en jaque al gobierno de Michel Temer, quien finalmente tuvo que ceder y anunciar una reducción del precio del diésel y otros beneficios para los transportistas.

Más allá del carácter disruptivo para el normal desenvolvimiento de la economía que tuvo la protesta de camioneros, lo característico de los “estallidos” en el caso de Chile y Colombia es, en primer lugar, la alta incidencia y articulación de actores no institucionalizados o corporativos, como un indicador inconfundible de un nivel alto de radicalización de la protesta y de amplia participación por encima de las estructuras de representación. Si bien en Brasil durante la protesta de los camioneros, los trabajadores petroleros anuncian una huelga y se registran algunos cacero-lazos contra el gobierno de Temer, gran parte de las acciones quedan circunscriptas a esta problemática en particular, no se extienden hacia otros sectores sociales, ni tampoco se cuestiona en términos generales al régimen político y económico.

Pero, además, después de las jornadas de mayo de 2018, la intensidad de la conflictividad entra en una pendiente declinante durante 2019 y 2020. Recién retoma una tendencia alcista hacia el año 2021, en el marco de una polarización muy marcada bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Incluso el pico de conflictividad que tiene lugar durante mayo 2019 responde a otro tipo de movimiento, ya que está motorizado por las masivas protestas contra el recorte al presupuesto para educación impuesto por el gobierno nacional y en rechazo a la propuesta de reforma jubilatoria.

Figura 11. Conflicto social. Brasil 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

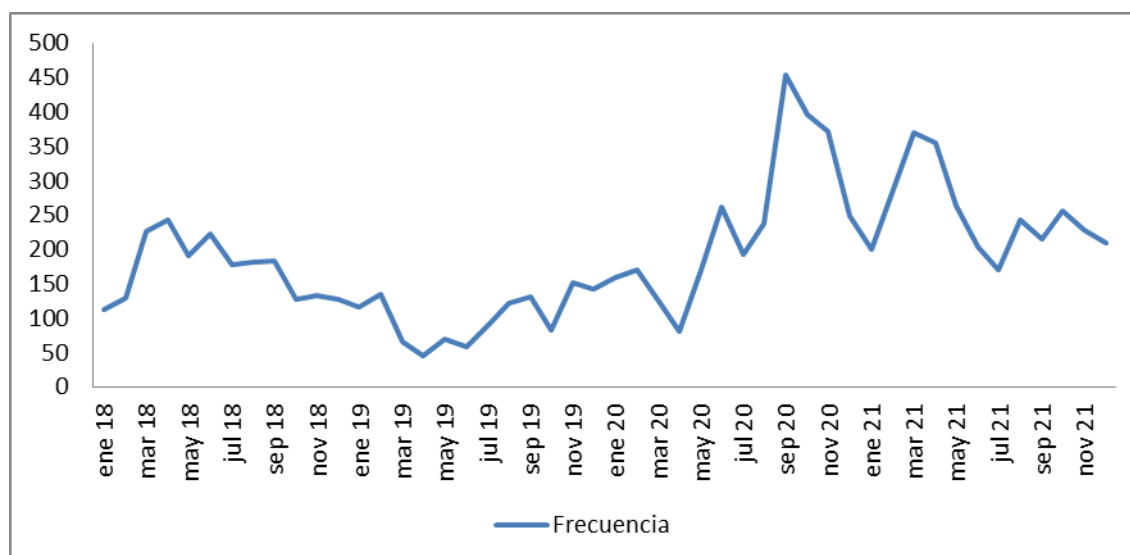
El caso argentino contrasta con los precedentes en la medida en que la dinámica de la protesta no se encuentra marcada por eventos disruptivos, más allá de que se pueden reconocer ciertos picos de conflictividad durante determinados meses. Aunque, como ya mencionamos, después de Chile es el país en donde la protesta alcanza una mayor intensidad durante nuestro periodo de estudio, medida en términos de tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. Argentina sería un caso particular en donde la conflictividad es alta desde el punto de vista cuantitativo, aunque con bajos niveles de radicalización.

En particular, desde nuestro punto de vista, lo que se puede destacar en el caso argentino es como la conflictividad se incrementa fuertemente con el cambio de gestión en el Gobierno Nacional, que antecede un par de meses al inicio de la pandemia. A partir de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la República en diciembre de 2019, los eventos de protesta se incrementan de manera sostenida, interrumpidos solo al inicio de la pandemia (durante los meses de marzo y abril de 2020), siendo el 2021 el año de mayor conflictividad bajo nuestro periodo de estudio. En este sentido, es interesante el hecho de que las fuertes medidas de aislamiento y distanciamiento social, tomadas para contener la propagación de los contagios, y que a priori podrían haber obstaculizado los procesos de organización y lucha, finalmente no impidieron el desarrollo de diversas manifestaciones o movilizaciones en los lugares de trabajo o en la vía pública. E incluso podríamos sostener que las intensifican.

Estas acciones de protesta social alcanzan el pico mensual de todo el periodo en septiembre de 2020 con 453 acciones mensuales. Durante dicho mes las acciones se encuentran motorizadas fundamentalmente por 4 sectores, cuyas demandas y formas de protesta dan cuenta de las dificultades de la coalición gobernante para procesar, dar respuesta e incluso desarticular los múltiples conflictos emergentes en el marco de la pandemia y de otros que se arrastran desde el periodo previo. Sin establecer una jerarquía en términos cuantitativos, en primer lugar, podríamos citar la intensificación de la conflictividad de diversos sectores estatales (administrativos provin-

ciales, municipales, personal de salud, docentes, judiciales, etc.), movilizados fundamentalmente por las reaperturas de paritarias. En segundo lugar, la disruptiva protesta de las fuerzas de seguridad policiales durante los primeros días del mes de septiembre (llegando incluso hasta las afueras de la residencia presidencial). Los policías exigían, entre otras demandas, una mejora salarial y el derecho al establecimiento de sindicatos. Asimismo, como a lo largo de todo 2021 y 2022, toman fuerza también manifestaciones de “ciudadanos” que bajo una multiplicidad de demandas (la gestión de la crisis del coronavirus, por la reapertura de actividades, en defensa de la propiedad privada, contra la corrupción y la reforma judicial, etc.) se expresan en contra del gobierno de Alberto Fernández, en general utilizando formas de movilización que desafían de manera directa las medidas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas por el Ejecutivo Nacional. Por último, podemos mencionar las múltiples protestas originadas en torno a la toma de tierras para la construcción de viviendas, en el predio de Guernica, aunque las mismas adquieren una mayor intensidad en el mes siguiente.

Figura 12. Conflicto social. Argentina 2018-2021



Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

En el caso argentino es evidente que a partir de la conjugación de las crisis de acumulación y de legitimidad como consecuencia de la irrupción de la pandemia (Grigera, 2022), se abren espacios sobre los cuales la dinámica de la protesta social se intensifica y se generaliza hacia amplios sectores de la sociedad. Aunque los menores niveles de radicalidad que adquiere la misma en términos comparativos (características que comparte con el caso brasileño), responde en parte, en nuestra opinión, a los mecanismos de institucionalización y desmovilización de la protesta que el ciclo neopopulista encarnó en los países que pasaron por la “marea rosa” (Grigera, 2017; Anderson, 2011; Singer, 2012).

8. Conclusión

A pesar de que en este trabajo solo hemos realizado una aproximación cuantitativa y comparativa a la protesta social (que debería ser complementada por abordajes cualitativos y estudios de caso), el análisis realizado nos ha permitido problematizar cómo las características y dinámica de la protesta social en los países de América Latina que hemos seleccionado, refleja (y condiciona) una serie de tendencias claves con respecto al desarrollo económico y político de la región. En este sentido, nos interesa destacar las siguientes características.

En primer lugar, si bien es posible reconocer determinados obstáculos a las capacidades de organización y exteriorización del conflicto social en general, sin embargo, hemos podido observar como las experiencias de los cuatro países analizados se encuentran cruzadas por diversos pero intensos procesos de lucha, que incluso no se han visto obstaculizados por la irrupción de la pandemia (más allá de los primeros meses iniciales de la misma). Aunque el hecho de que gran parte de estas acciones estén protagonizadas por sujetos que no presentan ninguna afiliación institucional o corporativa da cuenta, en algunos casos (Argentina y Brasil), de ciertas tendencias a la heterogeneidad en el campo del conflicto social, y en otros (Chile y Colombia) de ciertas tendencias a la radicalización del mismo. De manera que, esta característica de la protesta social al tiempo que expresa la crisis de legitimidad que aqueja a los Estados latinoamericanos, pone de manifiesto también la polarización interna y precarización de los mercados laborales que caracteriza a las economías de América Latina.

Más aun, y en segundo lugar, de la investigación se desprende que, más allá de las evidentes tendencias a la fragmentación y desarticulación del movimiento obrero organizado, de todos modos la movilización y las formas de resistencia motorizadas por la clase trabajadora (en sentido amplio) continúan siendo centrales en el capitalismo neoliberal contemporáneo. E incluso, hemos podido observar como una proporción importante de las acciones de conflictividad social se encuentran vinculadas estrechamente con las crisis económica regional y las políticas de austeridad implementadas por varios gobiernos de la región. Como hemos señalado, muchos de los conflictos que están protagonizados por sujetos que no presentan una identificación institucional o corporativa, en verdad expresan la protesta de diversos sectores de trabajadores/as vinculados a las distintas modalidades de precarización, informalidad y marginalidad de la fuerza de trabajo. Aspecto que se complementa con el escaso protagonismo que evidencian los sectores vinculados a la actividad industrial (salvo el caso argentino). Todas estas tendencias, nos indican que no solo el campo de la protesta social se fragmenta sino que también el conflicto obrero se vuelve cada vez más heterogéneo. Sin embargo, el caso de los/as docentes nos llevaría a matizar esta última idea, en tanto que no solo es un sector con una sostenida conflictividad al tiempo que ocupa un lugar estratégico en la sociedad, sino que además sus conflictos tienen la capacidad de articularse con otros sectores en lucha (por ejemplo el movimiento estudiantil) y de converger en un enfrentamiento directo con el Estado.

En tercer lugar, deberíamos mencionar que si en términos generales gran parte de las acciones de protesta se corresponden a movimientos de resistencia a los cambios regresivos en la estructura social, como consecuencia de la aplicación de un nuevo patrón de acumulación, también hemos podido observar sobre todo en los casos de Argentina y Brasil, como se configuran ciertos conflictos “desde arriba”, es decir de sectores que generalmente acuden a

movilizaciones y manifestaciones cuando se ven afectados sus intereses (ya sean económicos, políticos o ideológicos).

Por último, hemos señalado que a las tendencias de más largo plazo que marcan determinadas características de la protesta social, se le sobreimprimen lógicas más políticas del conflicto. En aquellos países que han evitado la “marea rosa”, o las experiencias neopopulistas de principios de siglo, la protesta social está atravesada por un proceso de radicalización que se expresa en el predominio de eventos disruptivos (“estallidos sociales”), protagonizados por un sujeto diverso sin identificación partidaria o corporativa que subsume todas las identidades previamente movilizadas. En Argentina y Brasil, por el contrario, la protesta evidencia menores niveles de radicalidad, aunque la irrupción de la pandemia (y la consecuente acentuación de la crisis de acumulación y de legitimidad) han acentuado la conflictividad social de una diversidad de actores sociales.

Referencias

- Alvarado Alcázar, A., Cortés Sequeira, S. & Sáenz Leandro, R. (2021). Crisis, pandemia y protesta social en Costa Rica durante el 2020. *Conflicto Social*, 14(26), 207-246.
- Anderson, P. (2011). Lula's Brazil. *London Review of Books*, 33(7), 3-12.
- Ansaldi, W. & Giordano, V. (2012). *América Latina. La construcción del orden*. Tomo II. Ariel.
- Bailey, D. J., Lewis, P. C., & Shibata, S. (2021). Contesting neoliberalism: Mapping the terrain of social conflict. *Capital & Class*. <https://doi.org/10.1177/03098168211054802>
- Barbosa Dos Santos, F. L. (2021). Rebeliones pandémicas en América del Sur. *Jacobin*. <https://jacobinlat.com/2021/08/16/rebeliones-pandemicas-en-america-del-sur/>
- Barrett, P. & Chen, S. (2021). Social Repercussions of Pandemics. *IMF Working Paper 2021/021*.
- Basualdo, V. & Peláez, P. (2020). *Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del COVID-19 en Argentina (marzo-mayo 2020)*. Documento de trabajo. Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina.
- Bieler, A. & Nowak, J. (2021) Labour conflicts in the Global South: an introduction. *Globalizations*, 18:8, 1323-1334. <http://doi.org/10.1080/14747731.2021.1884331>.
- Bloema, J. R. & Salemi, C. (2021) COVID-19 and conflict. *World Development*, 140(C), 105294 <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105294>.
- Bringel, B. (2020). Mucho más que un 'cacerolazo': resistencias sociales en tiempos de pandemia. En B. Bringel y G. Pleyers (eds.), *Alerta Global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia* (pp. 181-187). CLACSO.
- Carbonero, F., Ekkehard, E. & Weber, E. (2018). *Robots worldwide: The impact of automation on employment and trade*. Research Department Working Paper 36. International Labour Office.
- Castro Riaño, L. C. (2020). La protesta social en América Latina: una aproximación a su fisonomía a propósito de los estallidos sociales de 2019. *Revista Rumbos TS*. <https://doi.org/10.51188/rrts.num23.418>
- CELS (2016). *Los Estados latinoamericanos frente a la protesta social*. CELS.
- CEPAL – OIT (2019). Evolución y perspectivas de la participación laboral femenina en América Latina. *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe*, 21
- Duque, I., Ortíz, C., Samper, J. & Millan G. (2020). Mapping repertoires of collective action facing the COVID-19 pandemic in informal settlements in Latin America cities. *Environment & Urbanization*, 32(2), pp. 523-546. <https://doi.org/10.1177/0956247820944823>
- Gasparini, L., Cruces, G. & Tornarolli, L. (2011). Tendencias recientes en la desigualdad de ingresos en América Latina. *Economía* 11 (2): 147-90.
- Gaudichaud, F., Webber, J., & Modonesi, M. (2019). *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica*. UNAM Ediciones.

- Grigera, J. (en prensa). Adding Insult to injury: the Covid-19 crisis strikes Latin America. *Development and Change*.
- Grigera, J. (2017). Populism in Latin America: Old and New Populisms in Argentina and Brazil, *International Political Science Review* 38, no. 4 (September 2017): 441–55, <https://doi.org/10.1177/0192512117701510>.
- Grigera, J. (2011). La desindustrialización en Argentina. ¿Agresión a la manufactura o reestructuración capitalista? En A. Bonnet (comp.) *El país invisible: debates sobre la Argentina reciente* (pp. 81-101). Ediciones Continente.
- Grigera, J., y Nava, A. (2021). El futuro del trabajo en América Latina: crisis, cambio tecnológico y control. *El trimestre económico*, 88(352), 1011-1042. <https://doi.org/10.20430/ete.v88i352.1242>
- Howson, K., Ustek-Spilda, F., Grohmann, R., Salem, N., Carelli, R., Abs, D., Salvagni, J., Graham, M., Balbornoz, M., Chavez, H., Arriagada, A., & Bonhomme, M. (2020). ‘Just because you don't see your boss, doesn't mean you don't have a boss’: Covid-19 and Gig Worker Strikes across Latin America. *International Union Rights*, 27(3), 20-28. <https://www.muse.jhu.edu/article/838172>
- Kowalewski, M. (2020). Street protests in time of COVID-19: adjusting tactics and marching ‘as usual’. *Social Movement Studies*, 758-765. <https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1843014>
- Metternich, N. W. (2020, May 5). Drawback before the wave?: Protest decline during the Covid-19 pandemic. <https://doi.org/10.31235/osf.io/3ej72>
- Natalucci, A., Fernández Mouján, L., Kelmesz, A., Mate, E., Ramirez Andrade, I., Ríos, V., Stefanetti, C., & Vaccari, S. (2020) *La protesta en cuarentena. Análisis de una base cuantitativa sobre protestas sociales en el marco del proyecto monitor laboral*. CITRA
- Nasplesa, F. D. (2022). Reestructuración industrial en Argentina desde una perspectiva global: internacionalización productiva, liberalización y competencia coercitiva (1980-1998). *Sociohistórica*, (49), e160 <https://doi.org/10.24215/18521606e160>
- Nava, A. & Grigera, J. (2022) Pandemia y protesta social en América Latina: tendencias, actores y demandas de la conflictividad social y laboral en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. 2019-2020. *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, 20, 111-138. <https://doi.org/10.46688/ahmoi.n20.347>
- Piva, A. (2021). Crisis y reestructuración en una economía dependiente e internacionalizada. *Realidad Económica*, 51(344), 69-104.
- Piva, A. (2016). La desorganización de la acción de clase en la Argentina reciente y los problemas conceptuales para el estudio del conflicto obrero. *Estudios Políticos*, (48), 73-93. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n48a05>
- Pleyers, J. (2020) Los movimientos sociales y la batalla por el significado de la crisis. *Pensamiento y acción interdisciplinaria*, 6 (1), 108- 121. <http://doi.org/10.29035/pai.6.1.108>

- Quiroga, M. V. y Magrini, A. L. (2020). Protestas sociales y cuestión social en América Latina contemporánea. *Revista Temas Sociológicos*, (27), 275-308.
<https://doi.org/10.29344/07196458.27.2425>
- Rojas, R. (2020). Las mareas cambiantes de la Izquierda Latinoamericana. *Antagónica. Revista de investigación y crítica social- 1*(2), 101-156.
- Ros, J. (2011). La productividad y el desarrollo en América Latina: dos interpretaciones. *Economía UNAM*, 8 (23), 37-52.
- Silver, B. (2005) *Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870*. Akal.
- Silver, B. (2021) La (re) formación de la clase obrera. *Jacobin. América Latina*, 4, 113-116.
- Singer, A. (2012) *Os Sentidos do Lulismo*. Companhia das Letras.
- Smith, J. (2020) *Smart Machines and Service Work: Automation in an Age of Stagnation*. Reaktion Books
- Webber, J. (2019) The Deadweight of Structure: A Response to René Rojas on Latin America's Pink Tide. <https://nacla.org/news/2019/02/01/deadweight-structure-response-ren%C3%A9-rojas-latin-america%E2%80%99s-pink-tide>

Fuentes

- ACLED (2020) Armed Conflict Location & Event Data Project. <https://acleddata.com/curated-data-files/>



© del artículo, los/as autores/as

Este texto está protegido por una licencia Reconocimiento [Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Usted es libre para Compartir —copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato— y Adaptar el documento —remezclar, transformar y crear a partir del material— para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de:

Atribución: Usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.

[Resumen de licencia](#) - [Texto completo de la licencia](#)